

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	: MARÍA CECILIA MEJÍA DE RAVE
DEMANDADOS	: COLPENSIONES
LITISCONSORTE NECESARIO	: ÁNGEL MAURICIO ALZATE NOREÑA Y ALZATE NOREÑA SAS
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-018-2019-00131-01
RADICADO INTERNO	: 140-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 178

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que Colpensiones deberá realizar el cálculo actuarial solicitado por el Sr. Ángel Mauricio Álzate Noreña como persona natural y posteriormente la razón social fue asumida por Álzate Noreña SAS que desarrolla su actividad en el establecimiento de comercio denominado El Ranchito, correspondiente al lapso comprendido entre el 30 de abril al 30 de julio de 1999 en que dicho empleador no afilió a la demandante al Sistema General de Pensiones. Se CONDENE a Colpensiones a liquidar el cálculo actuarial solicitado por el Sr. Ángel Mauricio Álzate Noreña como persona natural y posteriormente la razón social fue asumida por Álzate Noreña SAS; una vez se ha cancelado el monto de dinero correspondiente al cálculo actuarial se tenga en cuenta dicho tiempo de servicios en la historia laboral de la demandante.

Se DECLARE que a la demandante le asiste el derecho a la pensión de vejez de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en aplicación del régimen de transición por cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990. Se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez y las mesadas adicionales de cada anualidad, en forma retroactiva a la demandante, ello es, a partir del día siguiente al último aporte por cotización efectuado al Sistema General de Pensiones hasta el día del cumplimiento de la sentencia o a la fecha de ingreso en nómina de pensionados; al pago de los intereses moratorios o subsidiariamente a reconocer la indexación; al pago de las costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que, la demandante nació el 9 de octubre de 1949, por lo que al 1º de abril de 1994 contaba con mas de 35 años de edad y los 55 años los cumplió el 9 de octubre de 2004, cumpliendo con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición. Una vez la demandante cumplió con los requisitos exigidos para acceder al derecho a la pensión de vejez, el 1º de noviembre de 2004, presentó solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; Colpensiones en el acto administrativo 5162 de 2005, dio respuesta reconociendo y pagando la indemnización sustitutiva en la suma de \$4.955.174 la cual se liquidó sobre 499 semanas cotizadas; la demandante a través de reclamación radicado el 9 de junio de 2006 solicito el reconocimiento de la pensión de vejez y en acto administrativo 26.839 de 2006, le negó la prestación económica; Colpensiones en las resoluciones 444.070 de 2014, 1342299 (sic) de 2016 y 16.683 de 2016 nuevamente negó el derecho a la pensión de vejez.

Que, al ser revisada la historia laboral, se evidencia que el tiempo que había laborado la demandante con el empleador Ángel Mauricio Álzate Noreña como persona natural, no fue afiliada al Sistema General de Pensiones, por el tiempo comprendido entre el 30 de abril al 30 de julio de 1999, es decir, por 13 semanas y está demostrado por las certificaciones expedidas por el empleador y por las declaraciones extrajuicio. Advirtió que la razón social como persona natural se transformó en una sociedad en el año 2002 con el nombre de Álzate Noreña SAS y asumió todas las obligaciones que tenía como empresa el Sr. Ángel Mauricio Álzate Noreña.

En actos administrativos, la accionada negó la solicitud de la liquidación del cálculo actuarial a la empresa Álzate Noreña SAS para el pago de los aportes

al sistema, por considerar que la asegurada había recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, violándose el art. 48 de la CP.

El Sr. Ángel Mauricio Álzate Noreña como empleador responsable de los aportes al sistema, de la demandante, solicitó nuevamente el 2 de enero de 2017 a Colpensiones la liquidación del cálculo actuarial por el periodo comprendido del 30 de abril al 30 de julio de 1999 para su pago respectivo, sin que a la fecha de la demanda se haya dado respuesta; en la historia laboral, la demandante tiene 501.43 semanas de cotización y si a ella se le suma 13 semanas que no pagó la empresa Ángel Mauricio Álzate Noreña y posteriormente fue transformada en Álzate Noreña SAS, tendría un total de 514 semanas de las cuales 510 semanas están en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional, es decir, entre el 9 de octubre de 1949 y el 9 de octubre de 2004, cumpliendo con los requisitos del Decreto 758 de 1990, y antes de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005; que la demandante goza del régimen de transición, por lo que se debe reconocer la pensión en aplicación del Decreto 758 de 1990; Colpensiones debe aplicar el principio de favorabilidad frente al reconocimiento de las pensiones del art. 53 de la CP y art. 21 del CST, que consiste en la obligación de todo servidor público de aportar por la situación mas favorable para el asegurado.

Sostiene que Colpensiones al resolver la solicitud de liquidación del cálculo actuarial, por el Sr. Ángel Mauricio Álzate Noreña hoy Alzate Noreña SAS, olvida analizar el contenido del art. 1º del Decreto 1887 de 1994, la cual reglamenta el inc 2º del párrafo 1º del art. 33 de la Ley 100 de 1993 con relación al cálculo de la reserva actuarial o calculo actuarial y el art. 57 del Decreto 1748 de 1995 modificado por el art. 17 del Decreto 3798 de 2003, y con base en esta normatividad, considera que no es de recibo el argumento de la entidad demandada, para negarse a realizar el cálculo actuarial porque en ningún aparte se discrimina que el citado cálculo actuarial no procede cuando al afiliado se le realice el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sino que el art habla de la omisión de afiliación por parte de los empleadores. El 22 de septiembre de 2017 nuevamente solicita la pensión de vejez la demandante.

RESPUESTA A LA DEMANDADA

La accionada en su contestación de la demanda dice que no le consta que el tiempo laborado con el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña como persona natural, no haya sido afiliada al sistema; ni la afirmación, que el Sr. Ángel

Mauricio Alzate Noreña en calidad de persona natural se haya transformado en Alzate Noreña SAS; que el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña haya solicitado la liquidación del cálculo actuarial; que en la historia laboral se reflejen 501,43 semanas que sumadas con 13 semanas que no cotizó el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña, den 514 semanas, de las cuales 510 semanas están en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional; ni le consta que la demandante sea beneficiaria del régimen de transición y se deba reconocer la pensión aplicando el Decreto 758 de 1990, por tratarse de hechos ajenos a la accionada. Las afirmaciones relativas al contenido normativo y que en las normas enunciadas no se discrimina que el cálculo actuarial no procede cuando hay pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, considera que no son hechos sino apreciaciones. Los demás hechos de la demanda dicen que son ciertos.

Se opone a que Colpensiones sea condenada al pago de la pensión de vejez, porque la demandante no acredita la totalidad de los requisitos necesarios conforme el art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 9º de la Ley 797 de 2003. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, por ausencia de uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez, petición de lo no debido, compensación indexada, inexistencia de obligación de pagar intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993; imposibilidad de condena en costas, prescripción, innominada, descuento del retroactivo por salud (expediente digital 01).

En auto del 4 de febrero de 2022, se ordenó integrar al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y a la sociedad Alzate Noreña SAS, en calidad de litisconsorte necesario por pasiva (expediente digital 16).

La sociedad Alzate Noreña SAS en la contestación de la demanda acepta la fecha de nacimiento; que mediante radicado 2015- 9623979 Colpensiones negó la solicitud de la liquidación de cálculo actuarial; que en la historia laboral tiene 501.43 semanas que sumadas a las 13 semanas tendría un total de 514 semanas, de las cuales 510 estarían dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, pero precisa que en ningún momento se dio la transformación del Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña a la sociedad Alzate Noreña SAS. Que no le consta la relación entre el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y la demandante ya que la sociedad Alzate Noreña SAS fue constituida en el año 2002. No es cierto que la razón social como persona natural se transformara en sociedad en el año 2002; ni es cierto que la sociedad Alzate

Noreña SAS haya asumido todas las obligaciones que tenía como empresa el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña pues no hubo sustitución patronal; es falso que mediante radicado 2016-8310456 Colpensiones haya negado la solicitud de la liquidación de cálculo actuarial hecha por la empresa Alzate Noreña SAS, porque la negación se dio porque Colpensiones reconoció que si la sociedad Alzate Noreña SAS se constituyó en el año 2002, no pudo existir omisión para el periodo del 30 de abril al 30 de julio de 1999; y no es cierta la vulneración de artículo 48 de la Constitución Política, ya que nunca se le negó el derecho a la Seguridad Social, simplemente se le concedió la indemnización sustitutiva solicitada por la misma demandante. No le constan los demás hechos de la demanda.

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Y propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho solicitado por la demandante, prescripción, mala fe de la demandante, nemo auditur propriam turpitudinem allegans, buena fe de la vinculada (expediente digital 21)

En la **contestación de la demanda presentada por el curador ad litem del Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña**, se manifestó que las afirmaciones realizadas respecto al derecho de la demandante al reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación del Decreto 758 de 1990, la aplicación del principio de favorabilidad, que las normas enunciadas en los hechos de la demanda no discriminan que el cálculo actuarial no proceda cuando se haya realizado el pago de la indemnización sustitutiva, y el agotamiento del procedimiento administrativo, considera que no son hechos sino consideraciones personales y jurídicas.

No se opuso a las pretensiones de la demanda, siempre que no afecten el interés del Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y se opuso de la condena en costas procesales a su defendido. Presentó como excepciones, las de inexistencia de la relación laboral, inexistencia de la obligación de pagar cálculo actuarial, prescripción (expediente digital 31).

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 5 de mayo 2023, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a Colpensiones, al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y a la sociedad Alzate Noreña SAS, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda. CONDENÓ en costas a cargo de la

Sra. María Cecilia Mejía Rave y a favor de Colpensiones y de la sociedad Alzate Noreña SAS. No condenó en costas en favor del codemandado Ángel Mauricio Alzate Noreña, por no haberse causado, al no haber comparecido al proceso y encontrarse representado por curador Ad Litem.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte accionante apela la decisión adoptada en primera instancia, por considerar que no era significativo que, en este evento, la demandante demostrara la relación laboral que se expuso en la providencia.

Expone que en el año 1999 existía el restaurante El Ranchito, el cual era un negocio familiar donde fungía como administrador el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña, entre otros; que en ese territorio las personas han hecho negocio de manera informal y no tenía en cuenta aspectos de seguridad social y ninguna de las personas que trabajaban, estaban afiliadas al sistema de seguridad social; que ante de debilidad administrativa por parte del empleador, pretendieron refrendar su error, elevando las peticiones de liquidación del cálculo actuarial a Colpensiones. Asegura que no se le dio la debida valoración probatoria a las solicitudes del cálculo actuarial que se realizaron por el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y por la empresa que en su momento fue S.A que se transformó a SAS, y no se debió darle relevancia a la figura de la relación laboral cuando se presume la aceptación que la demandante laboró con ellos. Sostiene que los aportes a la seguridad son imprescriptibles; que la obligación del Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña o de la familia Alzate Noreña fue heredada por la sociedad Noreña Alzate S.A. pues se trata de una figura de connotación constitucional.

Con fundamento en lo anterior solicita se le de valor probatorio a las peticiones que fueron elevadas a Colpensiones, admitiendo que a través de ellas la familia Noreña o la sociedad Alzate Noreña admitieron esa relación laboral por lo que considera que con esa prueba se logra demostrar la relación laboral.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia, en virtud del recurso de apelación, se centra en determinar si con las peticiones elevadas por el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y la sociedad Alzate Noreña SAS a Colpensiones, es prueba suficiente para revocar la sentencia y se condene a Colpensiones a realizar el cálculo actuarial solicitado correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de abril al 30 de julio de 1999.

En el presente proceso se encuentra acreditado y no es objeto de discusión, que por medio de la resolución 5162 de 2005 el ISS le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de \$4.955.174; la demandante solicitó la pensión de vejez y en resolución 444.070 de 2014, Colpensiones negó la prestación económica por no contar con los requisitos de la Ley 797 de 2003; en resolución 1342299 de 2016, Colpensiones negó pensión de vejez por no cumplir los requisitos exigidos por la ley y en resolución 164.683 de 2016 negó la pensión de vejez (fls. 22 a 27 del expediente digital 01); el 25 de agosto de 2016, Colpensiones le dio respuesta al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña en calidad de representante legal de la sociedad Alzate Noreña SA, a la solicitud de cálculo actuarial por omisión del empleador, manifestando que no procedía el cálculo actuarial porque la sociedad Alzate Noreña SA se había constituido el 5 de febrero de 2002 por lo tanto, no pudo existir omisión para los periodos del año 1999 (fl. 44 del expediente digital 01); en comunicación del 2 de enero de 2017 Colpensiones le informa al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña que la solicitud elevada de cálculo actuarial sería remitida al área competente (fl. 46).

En primera instancia la A Quo Absolvió a Colpensiones, al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y a la sociedad Alzate Noreña SAS de las pretensiones de la demanda, por considerar que la prestación personal del servicio no fue demostrada por la demandante dado que la prueba documental aportada no era suficiente para acreditar la ejecución real del servicio.

Frente a los extremos de la relación laboral y del salario, con base en la jurisprudencia señaló que no era suficiente la prueba de la existencia de la relación laboral para que se presuman esos dos conceptos; que en la demanda no se expuso el salario devengado; los extremos temporales no son claros porque en la declaración extrajuicio no se sabe si el extremo final es junio o julio; la declaración extrajuicio no fue ratificada en el proceso; la

respuesta dada por Colpensiones a las solicitudes de liquidación de cálculo actuarial, no se desprenden los extremos temporales ni el salario. Adicionalmente llamó la atención, porque al estudiar las sentencias que estudiaron el reconocimiento de la pensión de vejez, extrajo que la demandante recibió subsidio del estado conforme reposa en la historia laboral, el cual se devolvió, lo que llevó a concluir a la juez que ello implicaba que si ello ocurrió era porque no tenía para esa época una relación laboral y que no era posible que se solicitara en un proceso anterior que se tuvieran en cuenta semanas cotizadas por el consorcio prosperar y en este proceso se alegue una relación laboral en el mismo lapso.

Decisión que es apelada por la parte demandante, el cual considera que no era significativo demostrara la relación laboral y que la misma se encuentra probada con las reclamaciones elevadas por el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y la sociedad Alzate Noreña SAS cuando solicitaban la liquidación del cálculo actuarial. Argumento que no está llamado a prosperar, toda vez que la obligación que se le pueda imputar a Colpensiones de liquidar el cálculo actuarial, se deriva única y exclusivamente de la existencia de la relación laboral que haya existido entre la demandante con el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y/o la sociedad Alzate Noreña SAS, siendo esa la razón por la que se hacía necesario determinar si en el presente evento quedaron demostrados los elementos esenciales del contrato de trabajo.

En ese orden de ideas, para determinar si entre la demandante y el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y/o la sociedad Alzate Noreña SAS existió un contrato de trabajo, nos debemos remitir al art. 23 del CST en donde se determinaron que los elementos esenciales son los siguientes: “a. *La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador...; y c. Un salario como retribución del servicio. (...)*”, donde, es la parte demandante la que tiene la carga probatoria según lo establecido en los artículos 164 y 167 del C.G.P, de demostrar la **prestación personal del servicio** con el supuesto empleador demandado y que, por ello, recibió una remuneración, además de los extremos temporales de la relación y el salario, tal y como lo ha señalado la Corte suprema de Justicia en sentencia SL 5453 de 2018 y recientemente en la sentencia SL 672 de 2023.

De estos elementos, se debe decir que, para esta Corporación, no se lograron demostrar por las siguientes razones:

Frente a la actividad personal realizada por la Sra. María Cecilia Mejía Rave:

Al respecto, encontramos que en el hecho 6º de la demanda se indicó, que el tiempo laborado con el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña (como persona natural) no había sido afiliada y que los extremos eran del 30 de abril al 30 de julio de 1999, lo que se demostraba con la certificación expedida por el empleador y las declaraciones extrajuicio.

Cuando nos remitimos al fl. 28 del expediente digital 38, encontramos un documento emitido por el Sr. Sergio Fernando Úsuga Valencia en calidad de Director de Gestión Humana de la empresa Alzate Noreña SAS, el cual certificó que la demandante laboró para la compañía en el periodo del “30 de abril de 1999 al 30 de julio (sic) de 1999 con contrato verbal” y que dicha constancia juramentada era testigo la Sra. Marcela Guisao que se desempeñaba como Auxiliar de Gestión Humana, documento que fue autenticado el 23 de junio de 2016 por el Sr. Sergio Fernando Úsuga Valencia y la testigo.

Documento al que esta Sala no le da credibilidad, teniendo en cuenta que la demandante indicó en el libelo genitor que laboró para el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña **como persona natural** en el periodo 30 de abril al 30 de julio de **1999**, pero nótese, como el certificado fue dado por el Sr. Sergio Fernando Úsuga Valencia y la testigo Sra. Marcela Guisao, informan que la demandante laboró para la compañía cuando la demandante manifestó que había laborado para la persona natural, y aunado a ello, certifican que el contrato con la compañía tuvo lugar en el año 1999 a sabiendas que según el certificado de existencia y representación legal, la sociedad Alzate Noreña S.A se constituyó en escritura pública del **17 de enero de 2002**, inscrita el 5 de febrero de 2002 (expediente digital 21); aunado a ello, la certificación en mención es autenticada por los suscriptores en el año 2016, sin que tenga conocimiento este despacho, las razones por las cuales los señores Sergio Fernando Úsuga Valencia y Marcela Guisao conocían la existencia del presunto contrato verbal, pues como se indicó, la sociedad para la cual ellos laboran se constituyó 2 años después de los extremos temporales en que presuntamente la demandante laboró.

Por su parte, en lo que tiene que ver con las solicitudes elevadas a Colpensiones para liquidar el cálculo actuarial, encontramos que a fl. 44 del

expediente digital reposa comunicación del 25 de agosto de 2016 donde Colpensiones dio respuesta al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña **en calidad de representante legal** de la sociedad Alzate Noreña SA y en esa oportunidad se extrajo de la solicitud elevada lo siguiente: “Solicito muy amablemente realizar el cálculo actuarial en pensión de la Sr. Mejía de Rave María Cecilia”, de lo anterior debe resaltarse, que en ningún momento existe confesión de la existencia de un contrato de trabajo o relación laboral entre las partes en el año 1999 y adicionalmente, en esa oportunidad como el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña actuó en calidad de representante legal de la sociedad Alzate Noreña SA, no hay justificación alguna para condenar a la sociedad Alzate Noreña SAS al pago de un cálculo actuarial del periodo comprendido del 30 de abril al 30 de julio de 1999 a sabiendas que su constitución tuvo lugar en el año 2002.

Adicionalmente, tampoco hay lugar a tener como prueba de la existencia de la relación laboral las solicitudes en mención, como lo pretende la parte accionante, toda vez al plenario solo fueron allegadas las respuestas dadas por Colpensiones al Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña en calidad de representante legal de la sociedad Alzate Noreña S.A, a la solicitud de cálculo actuarial por omisión del empleador, y de una de ellas se extrae, que en la solicitud se plasmó “solicito muy amablemente realizar el cálculo actuarial en pensión de la Sra. Mejía de Rave María Cecilia...” (fl. 41 a 45), en este sentido, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 672 de 2023, analizando un caso con presupuestos facticos similares al que hoy nos convoca, donde se solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo y que en el tiempo laborado la empleadora omitió el pago de los aportes al sistema general de pensiones, solicitó que se condenara a sufragarlos a favor de Colpensiones, y a esta última a pagar la pensión de vejez. En dicho proceso la presunta empleadora se allanó a las peticiones, aceptó el vínculo laboral, los extremos temporales y la omisión de afiliación y emitió certificado laboral donde expuso los extremos de la relación de trabajo. En este proceso, la Corte consideró que de la simple afirmación de haber laborado al servicio de la parte accionada, no exime al demandante de demostrar la existencia de la real y efectiva prestación del servicio. Al respecto indicó:

“En ese orden, a esta Sala de la Corte le corresponde definir, si el juez de alzada erró al considerar que las pruebas incorporadas al plenario, eran insuficientes para tener por demostrada existencia de un verdadero contrato de trabajo entre partes, de suerte que no procedía la condena al pago del cálculo actuarial.

Para ello, importa recordar que en temas como el que ahora llama la atención, se ha ilustrado que quien alega su condición de trabajador y acredita la prestación personal del servicio, le asiste una ventaja probatoria consistente en que se presume la existencia de la relación laboral, correspondiéndole entonces al demandado destruir la presunción de que trata el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo, demostrando de que la labor se realizó en forma autónoma, independiente y no subordinada.

*En ese orden, surge manifiesto que **no le asiste razón al demandante cuando pretende derivar de su simple afirmación impositiva de haber laborado al servicio de la accionada, sin que acredite la real y efectiva prestación personal del servicio, el que se imponga la presunción del referida, y por ende, la obligación de desvirtuarla a quien se señala como supuesto empleador.***

(...)

*Puestas, así las cosas, luce palmario que la censura no cumplió con el deber de indicar con precisión y claridad la errada valoración que el Tribunal asignó a las pruebas denunciadas con respecto a las condiciones propias del nexo laboral; pues es claro, conforme se anotó en líneas anteriores, que el sentenciador de alzada no le restó validez al aludido certificado, ni desconoció el hecho de que la accionada se allanó a las pretensiones; lo que en síntesis coligió, es que el contenido de tal prueba en contexto con otros elementos de juicio, como el interrogatorio de parte absuelto por el actor, **no lograban demostrar con suficiencia que entre las partes se hubiera suscitado un real y verdadero vínculo laboral, que de haber sido probado, necesariamente forzaba la imposición de la condena al pago del cálculo actuarial, y el consecuente reconocimiento de la pensión de vejez,** previo análisis de los requisitos previstos por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.*

En esos términos, lo que debió realizar la censura a lo largo del embate, era demostrar a través de los elementos de juicio calificados, las circunstancias en las que se llevó a cabo el contrato laboral, para generar sin equivoco, la imposición del cálculo actuarial, que reconoce, prioritariamente, el trabajo como base de cotización para efectos de cubrir las contingencias que rescatan dichos aportes.

(...)

*Así las cosas, luce patente que el juez de segundo grado no se equivocó al inferir, que **pese a que la accionada certificó y admitió el nexo contractual laboral, y no se resistió a las pretensiones materia de debate, ello por si solo no generaba certeza de que entre las partes hubiera existido un contrato de trabajo, pues en aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no basta con que los contendientes acuerden que entre ellos hubo un nexo laboral, sino que es indispensable y vital que en el proceso quede acreditado a través de los diferentes medios de prueba, las condiciones, actividades, reglas y demás supuestos que permitan inferir sin dubitación que el trabajador destinó su fuerza al cumplimiento de las funciones impuestas por quien afirma era su empleador, y por las que devengó una remuneración.** (...)” (Resalto de la Sala)*

En ese orden de ideas, no existe prueba en el plenario de la que se logre derivar la prestación personal del servicio de la Sra. María Cecilia Mejía Rave al servicio del Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña y/o de la sociedad Alzate Noreña SAS del 30 de abril al 30 de julio de 1999. Por lo tanto, al no encontrarse demostrada la prestación personal del servicio no hay lugar a declarar que Colpensiones debió realizar el cálculo actuarial solicitado por el Sr. Ángel Mauricio Alzate Noreña como persona natural y posteriormente por la sociedad Alzate Noreña SAS por el periodo comprendido entre el 30 de abril al 30 de julio de 1999 al no existir prueba de la existencia de un contrato de trabajo y en consecuencia no hay lugar a que se condenen a las mismas al pago del cálculo actuarial a Colpensiones.

Sumado a ello, tampoco fueron demostrados los demás elementos del contrato de trabajo, en vista que no existe prueba de la remuneración percibida por la demandante del 30 de abril al 30 de julio de 1999 por la actividad desempeñada y tampoco los extremos laborales solo fueron referidos en los hechos de la demanda, sin que se pueda tener como prueba la certificación emitida por los señores Sergio Fernando Úsuga Valencia y Marcela Guisao pues recuérdese que para el año 1999 no existía la sociedad Alzate Noreña SAS para la cual ellos trabajan.

Y por si fuera poco, evidencia la Sala que en este evento existe un interés de defraudar al sistema pretendiendo el pago del cálculo actuarial del presunto empleador que omitió el pago de aportes, pues en el expediente administrativo de Colpensiones reposa sentencia del Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín (proceso anterior al que hoy nos convoca) en donde se analizó el derecho a la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición, del que se extrae que en esa oportunidad fue negada la prestación económica a la demandante por tener 497.7142 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y al resolver el recurso de apelación en ese proceso, la segunda instancia analizó como uno de los puntos del recurso de apelación, las semanas cotizadas por el **Consorcio Prosperar en el periodo de junio de 1998 a enero del año 2002**, siendo este aspecto relevante, pues en un primer momento la demandante pretendió el reconocimiento de periodo de 1998 al 2002 como beneficiaria del Consorcio Prosperar y en la demanda que hoy conocemos, pretende el reconocimiento del periodo del 30 de abril al 30 de julio de 1999 como trabajadora dependiente con contrato laboral y donde existió omisión de afiliación por parte del empleador.

Siendo así las cosas, el hecho de estar la demandante como beneficiada del Consorcio Prosperar en el periodo 30 de abril al 30 de julio de 1999 y al haber solicitado en un proceso anterior, que dichas semanas fueran tenidas en cuenta, son pruebas reinas de las cuales se pueden concluir que entre los señores María Cecilia Mejía Rave y Ángel Mauricio Alzate Noreña y/o la sociedad Alzate Noreña SAS no existió contrato de trabajo, lo que hace que no sea posible acceder a las pretensiones de la demanda.

En consideración a lo expresado, se CONFIRMARÁ la sentencia absolutoria.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, en la suma de \$290.000 por no prosperar el recurso de apelación presentado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, conforme a las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante, en la suma de \$290.000 por no prosperar el recurso de apelación presentado.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-018-2019-00131-01
Radicado Interno 140-23

Sin firma por ausencia justificada
CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ



SECRETARÍA SALA LABORAL EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: MARÍA CECILIA MEJÍA DE RAVE
DEMANDADOS	: COLPENSIONES
LITISCONSORTE NECESARIO	: ÁNGEL MAURICIO ALZATE NOREÑA Y ALZATE NOREÑA SAS
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-018-2019-00131-01
RADICADO INTERNO	: 140-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 30 de junio de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 30 de junio de 2023 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO

